

INTERPONE RECURSO DE REPOSICIÓN

Y APELACIÓN EN SUBSIDIO

Sr. Juez Federal

César Edgardo Murúa, DNI N° 28.657.790, en representación de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (en adelante Fundeps), Personería Jurídica Res. Nro. 31 “A”/10-2010 de la Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba, tal como fuera acreditado oportunamente, con el patrocinio letrado de la Dra. Mayca Balaguer, Mat. Fed. T° 506 F° 582, con domicilio digital en 27353557578, constituyendo domicilio para todos los efectos procesales en calle Bolívar N° 400, 2do piso, de la ciudad de Córdoba, me presento ante V.S. en estos autos caratulados “CRUZ, SILVIA MARCELA Y OTROS C/ MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERÍA DE LA NACIÓN S/AMPARO AMBIENTAL (FCB 021076/2016) y respetuosamente digo:

I.-) OBJETO

A.- Que en los términos del art. 238 ss. y cc. del C.P.C.C.N, vengo a interponer recurso de reposición con apelación en subsidio, en contra de la providencia de fecha 12.09.2019, notificada a esta parte con fecha 12.09.2019, por cuanto el tribunal dispone: *“Al escrito de fs. 3105/3107 téngase al compareciente por presentado y con el domicilio electrónico constituido. A la presentación efectuada por la*

Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) en los términos de la figura de Amicus curiae reglamentada por la Acordada 7/2013 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: 1) atento que la Excma. Cámara Federal de Apelaciones en su Resolución de fecha 22/2/2019 (2944/2952), que fuera consentida por todas las partes en el proceso, establece como objeto de la presente acción de amparo: “...se advierte claramente que la cuestión a” decidir gira en torno a determinar: 1) Si la Empresa PORTA HNOS.S.A. produce bioetanol o no, y en cuyo caso, si requería previo a su construcción y puesta en funcionamiento – habilitación por parte de la Ex- Secretaría de Energía de la Nación; y 2) Si por la magnitud del emprendimiento (obra) o por las actividades a realizar (producción de bioetanol) requería cumplir -previo a su construcción y puesta en funcionamiento- de manera completa e integral con el Procedimiento Administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de manera especial, y si debía presentar Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) y convocar a la ciudadanía a la respectiva Audiencia Pública (AP)...” y que, 2) FUNDEPS manifiesta que su Fundación tiene como principal tarea y aporte “ El asesoramiento técnico legal en materia ambiental en resguardo de los derechos humanos y el desarrollo sostenible” y que comparece en autos por tratarse el caso particular sobre el cese de la contaminación ambiental provocada por la actividad de la empresa PORTA HNOS. S.A. que afecta de manera directa a los vecinos de Barrio San Antonio; atento lo dispuesto por el art. 4º de la Acordada 7/2013 que prevé [sic]: “ La actuación del amigo del Tribunal....no podrá introducir hechos ajenos a los tomados en cuenta al momento de trabarse la litis o que

oportunamente hayan sido admitidos como hechos nuevos, ni versar sobre pruebas o elementos no propuestos por las partes en las etapas procesales correspondientes”, no ha lugar por improcedente. En su mérito, procédase por Secretaría a desglosar el escrito en cuestión, dejarse constancias certificadas en autos y devolverse a su Presentante(...)”.

Conforme se desarrollará *infra*, lo dispuesto por el órgano juzgador en el mencionado proveído, yerra en varios aspectos: en primer lugar, con relación al alcance del escrito presentado por quien suscribe con fecha 15.08.2019 cuyo **objeto** consistió en la solicitud espontánea para intervenir en los autos de mención en el carácter de *amicus curiae* de acuerdo a los arts. 2 y 9 de la acordada 7/2013 de la CSJN a los fines de, *a posteriori*, brindar fundamentos de hecho y de derecho vinculados con la cuestión debatida. En segundo lugar, tal decisión implica desvirtuar el instituto utilizado –amigo del tribunal–, con la consecuente afectación al derecho de participación ciudadana a los fines de afianzar la justicia, sustento axiológico de la figura de *amicus curiae*, por parte de quienes cuenten con una reconocida competencia sobre la cuestión debatida, particularmente en aquellas causas en las que se ventilan asuntos de trascendencia institucional de interés público.

B.- Por los argumentos que en acápites subsiguientes se expondrán, es que expresamente se solicita al Tribunal revoque por contrario imperio la providencia de fecha 12.09.2019 en la parte pertinente de acuerdo a la transcripción efectuada *supra*.

C.- Asimismo, para el caso en que el juzgador no hiciera lugar a la presente reposición, deduzco recurso de apelación en subsidio en los términos del art. 248 y ss. del C.P.C.C.N.

II.-) FUNDAMENTACIÓN

A. INVALIDEZ DEL RAZONAMIENTO

El decreto de fecha 12.09.2019 mediante el cual es rechazada la solicitud de intervenir en el carácter de Amigo del Tribunal, efectúa un razonamiento inválido para determinar luego la improcedencia de la solicitud. De escudriñar su contenido, la estructura del razonamiento esbozado por el órgano juzgador puede estructurarse del siguiente modo:

a.- La premisa normativa (mayor) está constituida por el art. 4 de la acordada 7/2013, que prevé “La actuación del amigo del tribunal... no podrá introducir hechos ajenos a los tomados en cuenta al momento de trabarse la litis o que oportunamente hayan sido admitidos como hechos nuevos, ni versar sobre pruebas o elementos no propuestos por las partes en las etapas procesales correspondientes” (en adelante premisa **a**).

b.- Como segunda premisa el Tribunal sostiene que “ Con base en la resolución de fecha 22.2.2019 de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones, el objeto de la acción de amparo consiste en determinar: 1.- Si la empresa Porta Hnos. S.A. produce bioetanol o no, y en cuyo caso, si requería previo a su construcción y puesta en funcionamiento – habilitación por parte de la Ex Secretaría de Energía de la Nación; 2.-

Si por la magnitud del emprendimiento (obra) o por las actividades a realizar (producción de bioetanol) requería cumplir -previo a su construcción y puesta en funcionamiento- de manera completa e integral con el procedimiento administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental de manera especial, y si debía presentar Estudio de Impacto Ambiental y convocar a la ciudadanía a la respectiva Audiencia Pública (en adelante premisa **b**).

c.- Como tercera premisa sostiene “Que la principal tarea de Fundeps consiste en el asesoramiento técnico legal en materia ambiental en resguardo de los derechos humanos y el desarrollo sostenible” (en adelante premisa **c**).

d.- Como cuarta premisa, sostiene que Fundeps “comparece en autos por tratarse el caso particular sobre el cese de la contaminación ambiental provocada por la empresa PORTA HNOS. S.A que afecta de manera directa a los vecinos de Barrio San Antonio”(en adelante premisa **d**).

Con base en dichas premisas, el órgano juzgador concluye sin más que resulta improcedente la solicitud de Fundeps de intervención en el carácter de amigo del tribunal. En efecto, la declaración de improcedencia pareciese ser deducida por el tribunal a partir del supuesto de que Fundeps, en la petición, cuyo objeto es tan solo solicitar la intervención en el carácter de amicus curiae, introduce circunstancias fácticas ajenas (“hechos ajenos”) a aquellas establecidas por la Excma. Camara Federal de Apelaciones como objeto de la acción de amparo en trámite, basándose en las denominadas premisas “c” y “d” supra esbozadas.

Pues bien, ante tales circunstancias, cabe efectuar ciertas precisiones en torno a la estructura del razonamiento que conduce al Sr. Juez a declarar la improcedencia de la solicitud, aclarando previamente que, de la lectura de dicha solicitud en modo alguno surge la introducción por parte de Fundeps de hechos ajenos a aquellos fijados al momento de trabarse la litis de acuerdo a lo dictaminado por la Excma. Cámara Federal de Apelaciones.

En primer lugar, la solicitud presentada por quien suscribe en representación de Fundeps, se orienta en la normativa prevista, por un lado, en el art. 9no, y por otro, en el art. 2do, de la Acordada 7/2013 de la CSJN. El primero de ellos prescribe que: *“En el caso de que un tercero pretenda intervenir espontáneamente (...) deberá solicitar a la Corte la inclusión de la causa en el listado correspondiente. La petición se llevará a cabo mediante una presentación por escrito (...) en que deberá expresar la naturaleza del interés del peticionario y las razones por las cuales considera que el asunto es de trascendencia o de interés público(...)”.*(el subrayado me pertenece) En relación al segundo de los artículos aludidos, este prevé que: *“El amigo del tribunal (...) En el primer capítulo de su presentación fundamentará su interés para participar en la causa (...)”.* Bajo la consideración de tales artículos del plexo normativo citado, es que la petición efectuada por Fundeps palmariamente posee como único fin solicitar al Tribunal la participación en el carácter de amigo del tribunal en cumplimiento de los artículos citados. Para ello, la petición desarrolla las razones por las cuales Fundeps considera que existe trascendencia o interés público en el presente proceso, y la naturaleza de su interés en el caso, contenido plasmado en el acápite denominado: “II.-

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD”; sub-acápites denominados “A.- EXISTENCIA DE INTERÉS PÚBLICO; B.- INTERÉS EN EL CASO”.

En este punto cabe subrayar que si la solicitud presentada por Fundeps, tan solo consiste en petitionar la participación como *amicus curiae*, cumplimentando con las exigencias establecidas por los arts. 9 y 2 de la acordada 7/2013, mal puede derivarse de su contenido la incorporación de “hechos ajenos”. En efecto, si la petición tiene como fin único explicitar los motivos por los cuales se considera al pleito de interés público, y por qué tal circunstancia resulta de interés para el peticionante, resultaría imposible considerar que en tal oportunidad procesal se pretendieron incorporar siquiera “hechos”, más aún, “hechos ajenos”, pues tan solo se limita a mencionar el interés público del asunto, y el interés del peticionante sin más.

Retomando la fundamentación, es preciso señalar que de ambos subacápites presentes en la solicitud de Fundeps, es que el Tribunal extrae sus premisas (premisas **c.-** y **d.-** conforme la estructura de razonamiento *supra* esbozada), de las cuales aparentemente deriva, sin razones aparentes, que Fundeps intenta introducir “hechos ajenos” a aquellos que constituyen la litis del pleito. Luego, bajo tales consideraciones, el órgano juzgador encuadra tal situación (incorporación de hechos ajenos) en el supuesto de hecho previsto por el art. 4to de la acordada 7/2013, para luego declarar la improcedencia.

Más precisamente, tal derivación es realizada a partir del contenido del ítem de la presentación efectuada titulado: “**B.-) INTERÉS EN EL CASO**”, en el cual a grandes rasgos, se mencionan: el objeto estatutario de Fundeps en

materia ambiental; la correspondencia de tal objeto social con aquel planteado en los presentes autos de acuerdo a los escritos de demanda presentados por los actores conforme surge de la resolución de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de fecha 22.2.19; y la experiencia de Fundeps en la temática ambiental a partir de la intervención mediante el aporte y asesoramiento técnico legal en material ambiental en resguardo de los derechos humanos y el desarrollo sustentable.

Más aún, las frases textuales citadas por el juzgador en la providencia aquí cuestionada (plasmadas en las premisas c.- y d.- según el razonamiento esbozado parágrafos supra) no pretenden introducir hechos ajenos. Por el contrario, sólo hacen referencia a: en primer término (**premisa d.-**), a las circunstancias jurídicas que rodean al caso judicial según la resolución de la propia Cámara Federal de Apelaciones de fecha 22.2.19, en particular, aquellas que conforman el objeto de los accionantes conforme así lo advierte el voto del juez de Cámara Dr. Vélez Funes, quien literalmente sostiene que: “del escrito de demanda surge que la parte actora pretende y solicita el “cese de contaminación(...)”, todo lo cual se trata de una pretensión propuesta por las parte actora en la etapa procesal correspondiente. En segundo término, la denominada **premisa c** utilizada por el juez, se apoya en una expresión de la solicitud en la cual se hace referencia a aquella actuación llevada a cabo por Fundeps de asesoramiento legal en materia ambiental en diferentes asuntos vinculados a la materia a fin de demostrar la expertiz en el microsistema normativo ambiental. No constituyendo ninguna de ambas partes seleccionadas por el juez, una incorporación de un “hecho ajeno”.

En resumidas cuentas, considerando los requisitos exigidos por los arts. 2do y 9no de la Acordada 7/2013, esto es, demostrar “la naturaleza del interés del peticionario y las razones por las cuales considera que el asunto es de trascendencia o de interés público(...)”, es que Fundeps con fecha 15.08.2019 solicitó ser tenido como amigo del tribunal, apoyándose en las directrices de la norma, esbozando en el “**OBJETO**” la posibilidad de intervenir en el **carácter de *amicus curiae* a los fines de acompañar, luego de ser admitidos, fundamentos de hecho y de derecho que se consideran relevantes a fin de resolver sobre el objeto procesal, el cual Fundeps no desconoce.** En dicha petición, quien suscribe acreditó en un acápite, el interés público que la causa revestía, y en otro acápite, puso de manifiesto la naturaleza del interés del peticionante en el caso. Es así que en la solicitud de *amicus curiae*, se describió pormenorizadamente en ambos acápites, el objeto de la pretensión jurídica de los demandantes, esto es, la solicitud de la clausura y cierre definitivo de la planta de bioetanol de Porta Hnos. por carecer habilitación legal (Licencia Ambiental), y por no haber concluido previo a su entrada en funcionamiento el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, circunstancias que el juez soslayó en su razonamiento. A la vez que en la solicitud de *amicus curiae* se describió (con basamento en el voto del vocal de la Excma. Cámara de Apelaciones, Dr. Vélez Funes), que la acción procuraba subsidiariamente el cese de la contaminación ambiental (resolución de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones del 22.02.2019).

Bajo tales consideraciones es que resulta imposible derivar que la solicitud de Fundeps, pretendió introducir hechos ajenos a la litis. Ello así por cuanto de

la lectura de la citada solicitud surge que tan solo se enunciaron circunstancias jurídicas del caso a resolver por S.S, y se desarrollaron antecedentes referidos a la actuación de Fundeps, todo ello a los fines de dar cuenta del interés público que reviste la causa, y en particular, del interés que revestía la participación en el caso por parte de Fundeps.

En tal entendimiento es que las denominadas premisas “c” y “d”, utilizadas en el razonamiento efectuado por el Tribunal, plasmadas en el proveído de fecha 12.09.2019, para considerar que aparentemente Fundeps intentaba introducir “hechos ajenos”, resultan inválidas. Ello así puesto que, valga la redundancia, de su simple lectura no surge modo alguno de derivar la incorporación de hechos “ajenos”, pues tan solo se mencionaron circunstancias jurídicas y fácticas que hacen al caso judicial y a la expertise de Fundeps en la temática, respectivamente. Por lo tanto, la conclusión de declarar improcedente la solicitud, deviene errónea dado que las premisas analizadas (**c y d**), son inválidas, y por tanto, no permiten acreditar la existencia del “supuesto de hecho” requerido por la norma prevista en el art. 4to de la acordada 7/2013, es decir, la incorporación de “hechos ajenos”, luego, considerar aplicable la norma, ergo, declarar la improcedencia de la solicitud efectuada por Fundeps.

Hasta aquí, lo resuelto por el Tribunal, resulta atentatorio a los principios de razón suficiente, de fundamentación lógica de las decisiones, y violatorio de lo establecido en los arts. 1º, 2º y 3º en especial del Código Civil y Comercial de la Nación.

B.- APLICABILIDAD DE LA ACORDADA 7/2013 DE LA CSJN

Sin perjuicio de los argumentos vertidos en el ítem que antecede, es necesario determinar el alcance que posee la acordada 7/2013 de la CSJN, aplicada por el tribunal en la resolución aquí cuestionada, más precisamente determinar el ámbito de aplicación de dicho reglamento y consecuentemente, su fuerza normativa vinculante en relación a aquellos procesos tramitados en tribunales inferiores del fuero federal y/o local.

De una atenta lectura de la acordada dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación N° 7/2013, expediente N° 2439/04, del 23 de abril del 2013, surge que el ámbito de aplicación de sus previsiones se limita a aquellas causas judiciales radicadas o tramitadas en los estrados de la propia CSJN. Así, en los considerandos de la resolución, claramente se expresa que las modificaciones efectuadas por la acordada 7/2013 al régimen anterior (acordadas 28/2004 y 14/2006 de la propia Corte) recaen sobre aquellas “causas judiciales radicadas ante dicho estrado”, esto es, ante la CSJN. En idéntico alcance, en el Art. 1° del reglamento anexo de la acordada referida (7/2013), se expresa que aquellas personas físicas o jurídicas que no fueren parte en el pleito pueden presentarse ante “la Corte Suprema de Justicia de la Nación” en calidad de amigo del tribunal, ya sea en aquellos procesos judiciales que tramitan ante dicho órgano, ya sea con base en su competencia originaria o apelada (arts. 116 y 117 C.N). Por su parte, el art. 5° del reglamento, prevé la facultad de “la Corte Suprema” de establecer cuáles serán las causas aptas para la actuación del amigo del tribunal, en el

marco de las reglas procesales que ordenan la sustanciación de trámites ante la Corte. Asimismo, en el art. 9, 10 y 11 del reglamento, establece requisitos en cuanto a lo solicitud ante “la Corte” para espontáneamente ser tenido en el carácter de amigo del tribunal, los requisitos a cumplimentar por parte de los letrados patrocinantes, en particular el hecho de encontrarse “autorizados para litigar ante la Corte Suprema”, y la facultad de la “Corte Suprema” de ordenar la incorporación al expediente del amigo del tribunal.

A la luz del articulado, surge diáfano que la acordada 7/2013 regula la actuación del amigo del tribunal ante aquellos procesos que tramitan ante el órgano supremo. Se colige de tal modo que el ámbito de aplicación de tal reglamentación está determinado por aquellos procesos que se encuentran radicados en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, procesos en los cuales deviene obligatorio el cumplimiento de la normativa en cuestión para ser tenido en el carácter de Amigo del Tribunal. Mas nada establece dicha normativa en cuanto a su aplicación obligatoria por parte de los tribunales inferiores, ya sea en el fuero federal o provincial. En efecto, la normativa precisa reglas de admisibilidad, facultades y requisitos que deben ser de estricto cumplimiento en las causas que se tramitan ante la CSJN.

Ante tal consideración, la aplicación de la acordada 7/2013 por parte de los tribunales inferiores del fuero federal o locales, no resulta aplicable ni deviene imperativa para quienes procuren participar en el carácter de Amigo del Tribunal en procesos que tramitan ante aquellos. Eventualmente tal reglamento (7/2013) podrá considerarse un lineamiento a tener en cuenta al momento de considerar

pretorianamente la aceptación de intervención de amigos del tribunal, mas no implica ello una aplicación obligatoria, estricta y vinculante, tal como el tribunal aquí parece aplicarlo. En efecto, en tanto lineamiento orientador, el tribunal cuenta con profusa jurisprudencia tanto local como regional¹, al igual que reglamentaciones internacionales, como ser el reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que regula la figura del *amicus curiae* y que en su art. 44, inc. 1º al 4º no establece mayores requisitos para la petición de ser tenido como amigo del tribunal, que aquellos vinculados con la firma y el plazo de presentación ante la Corte IDH. Es bajo este entendimiento que el escrito presentado por Fundeps ante vuestro juzgado se apoya en tal reglamento, más ello no implica dotar de obligatoriedad a la acordada bajo pena de resolución de improcedencia.

¹**Precedentes locales:** FSM 37164/2014/5/RH2, “Liparelli, Verónica y otros s/ queja”, rta. 20/10/2016, Reg. N° 1319/16.4; FSM 16/201/TO1/CFC16 “Aranzasti, Adrián M. s/ recurso de casación”, rta. 02/05/2017, Reg. N° 436/17.4; causa FSM 25005863/2012/31/RH1, “Altuna, Ana M. s/ queja”, rta. 16/02/2017, Reg. N° 50/17.4; causa FSA 13438/2016/TO1/4/1/CFC1, “Coronado Ayllon, Alicia s/ recurso de casación”, rta. 15/02/2018, Reg. N° 17/18.4; FLP 20133/2016/5/CFC3 “Gamarra, Idalina s/ recurso de casación”, rta. 13/03/2018, Reg. N° 107/18.4, todas del Registro de la Sala IV de esta Cámara y del registro de la Sala I causa CCC32423/2012/2/1/CFC1, “Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia s/ presentación”, rta. 07/10/2016, Reg. N° 1835/16.1 **Precedentes de la Corte IDH:** Sentencia del 29 de julio de 1988, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras (Fondo), p. 38; Sentencia del 21 de julio de 1989, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras (Reparaciones y Costas), p. 19; Sentencia del 20 de enero de 1989, Caso Godínez Cruz Vs. Honduras (Fondo), p. 40; Sentencia del 21 de julio de 1989, Caso Godínez Cruz Vs. Honduras (Reparaciones y Costas), p. 19; Sentencia del 15 de marzo de 1989, Caso Fairén Garbí y Solís Corrales Vs. Honduras (Fondo), p. 47; Sentencia del 10 de septiembre de 1993, Caso Aloebotoe y otros Vs. Suriname (Reparaciones), p. 38; Sentencia del 21 de enero de 1994, Caso Gangaram Panday Vs. Suriname (Fondo, Reparaciones y Costas), p. 37; Sentencia del 29 de enero de 1997, Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua (Fondo, Reparaciones y Costas), p. 41; Sentencia del 17 de septiembre de 1997, Caso Loayza Tamayo Vs. Perú (Fondo), p. 21; Sentencia del 19 de junio de 1998, Caso Benavides Cevallos Vs. Ecuador (Fondo, Reparaciones y Costas), p. 24 y 31; Sentencia del 29 de septiembre de 1999, Caso Cesti Hurtado Vs. Perú (Fondo), p. 34 y 62; Sentencia del 31 de enero del 2001, Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú (Fondo, Reparaciones y Costas), p. 19; Sentencia del 2 de febrero del 2001, Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá (Fondo, Reparaciones y Costas), p. 37 y 48; Sentencia del 28 de noviembre del 2003, Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá (Competencia), p. 20, 28, 31 y 46; Sentencia del 28 de noviembre del 2005, Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá (Cumplimiento de Sentencia), p. 14; Sentencia del 5 de febrero del 2001, Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile (Fondo, Reparaciones y Costas), p. 31 y 34; Sentencia del 6 de febrero del 2001, Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú (Reparación y Costas), p. 27, 28, 30 y 43; Sentencia del 31 de agosto del 2001, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awast Tigni Vs. Nicaragua (Fondo, Reparaciones y Costas), p. 38, 41, 42, 52 y 61; Sentencia del 3 de septiembre del 2001, Caso Barrios Altos (Chumbipuma Aguirre y otros) Vs. Perú (Interpretación de la Sentencia de Fondo), p. 7; Sentencia del 21 de junio del 2002, Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago (Fondo, Reparaciones y Costas), p. 51; entre otros.

En idéntico sentido al aquí sostenido, es decir, la concluyente inaplicabilidad de la acordada 7/2013 en procesos que tramitan ante tribunales inferiores distintos a la CSJN, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, en los autos Nro. 1775/2013 del registro de la Sala IV, caratulados: “Blaquier, Carlos Pedro Tadeo y otro s/recurso de casación”, sostuvo que los criterios para la admisibilidad del *amicus curiae* no debían ser tomados del reglamento de la Corte Suprema porque su texto “se aplica sólo a las presentaciones efectuadas ante el máximo tribunal”. Remarcaron además que, al igual que aquí se sostiene, “la acordada que establece el reglamento (acordada 7/2013) del máximo tribunal podría servir de inspiración o guía para impulsar un reglamento en la instancia”, a más, “en tanto guía de carácter fundamental, no supone que deba aplicarse cada uno de los artículos de ese reglamento”, incluso el citado reglamento no prevé expresamente que la consecuencia del incumplimiento de los requisitos sea la inadmisibilidad de la presentación”. Dichas valoraciones efectuadas por la Excma. Cámara Federal de Casación Penal resultan plenamente aplicables al caso aquí planteado, conforme se sostuvo en párrafos anteriores.

A mérito de las consideraciones vertidas es que, sin perjuicio de aquello sostenido en el ítem **A.-** del presente desarrollo en relación al erróneo razonamiento efectuado por el Tribunal en cuanto a la incorporación de “hechos ajenos”, el juzgador aplica el art. 4to de un plexo normativo (acordada 7/2013) erróneamente. Conforme aquí se sostuvo el articulado de la reglamentación, a las claras no resulta de aplicación obligatoria para los tribunales inferiores, sino que funciona tan solo como una directriz o lineamiento. Aún más, conforme sostiene la Cámara de Casación Federal en

el precedente citado, tal reglamento no establece la inadmisibilidad de la presentación ante el incumplimiento de ciertos requisitos, *mutatis mutandi*, la improcedencia de la solicitud para ser considerado amigo del tribunal, solución propugnada por el Tribunal en la resolución aquí puesta en crisis, la cual deberá de ser revocada contrario imperio por V.S.

C.- AFECTACIÓN DE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES

El rechazo por improcedencia de la solicitud para ser tenido en el carácter de Amigo del Tribunal, no sólo resulta errónea en tanto las premisas en las que se sostiene la decisión resultan inválidas, y más aún se apoya en una normativa que a todas luces no resulta de aplicación obligatoria y que aún subsidiariamente aplicada no prevé la desestimación o improcedencia. Más aún, el proveído vulnera principios constitucionales que se erigen como directrices que orientan al servicio de justicia en pos de una resolución democrática en aquellas causas que revisten un interés o trascendencia pública, directrices que encuentran sustento en la Constitución Nacional y tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (arts. 44 y 48 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y copiosa jurisprudencia de la Corte IDH).

En tal sentido, la figura del *amicus curiae* se sustenta axiológicamente en las cláusulas constitucionales que consagran la forma republicana de Gobierno y la democracia participativa. En efecto, la presentación en el carácter de *amicus curiae* propende a garantizar una amplia participación de la sociedad en causas

de especial trascendencia pública y de ese modo vigoriza esencialmente el principio republicano de Gobierno. En similar orden de ideas, se ha sostenido que “La falta de previsión normativa expresa puede decidirse a favor de la admisión de esta figura en tanto constituye un medio procedimental no prohibido de ejercicio de la libertad de expresión, del derecho a peticionar ante las autoridades y de reforzamiento del principio republicano de gobierno”². Al respecto, Carlos Nino afirmó que promover y ampliar el proceso democrático requiere hacer más laxos los criterios de participación en el proceso judicial, por vía del reconocimiento de intereses difusos, de las acciones de clase, y de la intervención de amicus curiae³.

En este punto cabe recordar los considerandos expresados en la acordada 28/2004 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante la cual se reguló primigeniamente la figura del amigo del tribunal. En las referidas consideraciones, la Corte sostuvo que dicho instrumento estaba destinado a permitir la participación ciudadana en la administración de justicia, y agregó que “en el marco de las controversias cuya resolución por esta Corte genere un interés que trascienda al de las partes y se proyecte sobre la comunidad o ciertos sectores o grupos de ella, a fin de resguardar el más amplio debate como garantía esencial del sistema republicano democrático, debe imperar un principio hermenéutico amplio y de apertura frente a instituciones, figuras o metodologías que, por su naturaleza, responden al objetivo de

² Martín Abregú -Christian Courtis, “Perspectivas y posibilidades del amicus curiae en el derecho argentino”, artículo publicado en “La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales”, pág.390, Editores del Puerto, 1ra. reimpresión, 2004

³ Carlos Nino, Fundamentos de Derecho Constitucional, Ed. Astrea, pág. 696.

afianzar la justicia entronizado por el Preámbulo de la Constitución”(el subrayado me pertenece). Es decir que, de conformidad con el criterio de la Corte Suprema, la admisibilidad de *amicus curiae* en cierto tipo de causas, como la que aquí se devela conforme se plasmara en el escrito de solicitud de intervención, se deriva directamente de nuestra forma republicana de Gobierno, y del objetivo de afianzar la justicia, expresado en el Preámbulo de la Constitución Nacional. En la citada acordada, se consideró que la intervención de *amicus* también encuentra su fundamento en lo dispuesto en el art. 33 de la Constitución, y que “la actuación de los Amigos del Tribunal encuentra sustento en el sistema interamericano al cual se ha asignado jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22), pues ha sido objeto de regulación en el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (art. 62.3) y ha sido expresamente autorizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sustento en los arts. 44 y 48 de la Convención Americana”.

Finalmente, en relación con la participación de *amicus curiae* reconocida por la Corte, la doctrina ha sostenido que “ella recibe legitimación constitucional, enunciativamente, en los arts. 14 (derecho de peticionar a las autoridades); 18 (debido proceso); 33 (derechos y garantías implícitos); 28 (prohibición de toda limitación irrazonable al ejercicio de los derechos); 75 inc. 22 párr. 2º, en cuanto a la jerarquización constitucional de los tratados internacionales en materia de derechos humanos allí individualizados y los que en el futuro sean ungidos con tal carácter; y 36, que entroniza un postulado trascendente de autoafirmación de la fuerza normativa de la Constitución; todo lo que conforma un complejo de factores recorrido por el caudal

axiológico que le suministra el imperativo de "afianzar la justicia", que representa una de las pautas vertebrales del preludio constitucional”⁴.

Como colofón de tal basamento constitucional, la “improcedencia” resuelta por el órgano juzgador a la solicitud de Fundeps para ser considerado Amigo del Tribunal, vulnera aquellos principios jurídicos que la institución de *amicus curiae* procura satisfacer, y por lo tanto agravia en cuanto a los derechos al acceso a la justicia y a la participación, considerando especialmente el objeto estatutario de la compareciente que represento. Dado que la causa traída a resolución de vuestro estrado reviste el carácter propio de relevancia pública, en razón de su experiencia en este tipo de cuestiones vinculadas a la materia ambiental, la participación de Fundeps deviene propicia a los fines de afianzar la justicia, pilar básico del ordenamiento constitucional argentino.

Por tales razones deviene imperativo que vuestro Tribunal deje sin efecto por contrario imperio el proveído de fecha 12.09.2019, por cuanto atenta contra las directrices y principios de raigambre constitucional mencionados, arts. 1 , 14, 18, 33,28, , 75 inc.22, de la Constitución Nacional, arts. 44 y 48 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

⁴ Bazán,Víctor, “La Corte Suprema de Justicia de la Nación y un importante respaldo institucional a la figura del *amicus curiae*”, Jurisprudencia Argentina. Suplemento de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, LexisNexis, Buenos Aires, 29 de setiembre de 2004, pp. 5-16

III.-) RECURSO DE APELACIÓN SUBSIDIARIO

Para el hipotético supuesto de que el Tribunal no hiciese lugar al recurso de reposición incoado, dejo planteado subsidiariamente y de conformidad con los arts. 248, ss. y cc. Del C.P.C.C.N, el recurso de apelación contra dicho pronunciamiento.

IV.-) PETITORIO

En virtud de todo lo expuesto, solicito:

I.- Tenga por interpuesto en legal tiempo y forma el recurso de reposición en contra de la resolución de fecha 12 de septiembre de 2019.

II.- Con base en el presente, revoque la resolución de mención de fecha 12 de septiembre de 2019 a la luz del presente recurso.

III.- Tenga presente el recurso de apelación deducido y en su caso, lo conceda.

PROVEER DE CONFORMIDAD Y SERÁ JUSTICIA.